

La Restauración: Necesaria y aun vigente¹

Roberto Cassá Bernaldo de Quirós²

Ciento cincuenta años es un período prolongado que permite una dimensión de largo plazo conveniente para el análisis, pero que tiene por contrapartida una lejanía que dificulta la intelección de situaciones. La Restauración de la independencia de la República Dominicana en 1863 fue un fenómeno complejo que debe ser objeto de un examen para establecer sus contenidos y los móviles que animaron a sus protagonistas, que se pueden identificar como el pueblo, en su conjunto.

Hay pocos acontecimientos en la historia dominicana que hayan tenido una repercusión semejante en la reorientación de tendencias. En buena medida, constituyó una culminación de prolongados procesos iniciados con el despuntar del siglo consistente en la búsqueda por los dominicanos de la autodeterminación, mediante la cual se obtendrían los espacios necesarios de autonomía social que se desprendían de la nueva época histórica en el mundo occidental, iniciada con las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII.

La Restauración vino a ser entonces el acontecimiento culminante del siglo XIX, en tanto que ratificó y expandió

1. Conferencia pronunciada en la noche del jueves 15 de agosto en el Centro León, Santiago de los Caballeros.
2. Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, presidente de su Junta Directiva durante el período 2001-2004 y Director del Archivo General de la Nación.



estas búsquedas de los dominicanos que se canalizaron primordialmente por medio de la aspiración a la autonomía en un Estado independiente. En tal sentido se orientó la construcción de la conciencia nacional.

La búsqueda de la autonomía nacional registró obstáculos persistentes a lo largo del siglo XIX, que explican que no hubieses una resolución definitiva para el cumplimiento de los objetivos trazados. La Restauración misma fue un producto de este carácter convulso de la historia dominicana y su mismo resultado asociado con tales determinantes. Detrás de la lucha nacional subyacía una sociedad en extremo atrasada, con muy bajos niveles de desarrollo de la economía de mercado y una base social campesina. La generalidad del pueblo no estaba en condiciones de asumir una conciencia nacional explícita, sino que operó de manera defensiva para sostener las ganancias sociales obtenidas en los primeros tiempos del siglo XIX, cuando se abolió la esclavitud, se generalizó la clase campesina y se estatuyeron regulaciones jurídicas que garantizaban la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.

En consecuencia, en el panorama del siglo XIX se observaba dos corrientes paralelas y en buena medida contradictorias en la gestación y desarrollo del hecho nacional. La primera estuvo delimitada en círculos minoritarios de las clases burguesas urbanas que se plantearon sistematizar un orden de autonomía en beneficio de todos, acorde con los postulados ilustrados plasmados por primera vez en la Revolución Francesa. La segunda corriente abarcaba a la gran mayoría del pueblo, sobre todo el campesinado, que no se planteaba una formulación política utópica o progresiva sino que actuaba de manera reactiva para sostener conquistas sociales y oponerse a la reducción de los espacios de autonomía por parte de las



fuerzas mercantiles o estatales. Los urbanos se imbuyeron de los principios del liberalismo para proponerse construir una sociedad progresiva y de iguales. Los campesinos, en cambio, instintivamente recelaban de esta postura y a menudo se oponían abiertamente a ella por apego a lo existente, a lo tradicional a todo lo que perturbara sus sentidos de vida consuetudinarios.

Era lógico que hubiese contraposiciones porque el urbano se nutría, en buena porción parasitariamente, del rural, extrayéndole excedentes en las relaciones comerciales desiguales y en la imposición de gravámenes fiscales. Sin embargo, no todos los canales de la interacción política estaban cerrados entre campesinos y ciudadanos, por la debilidad de las relaciones de mercado y del aparato estatal. Lo característico, así, del siglo XIX fue una coexistencia difícil e inestable, pero coexistencia al fin y al cabo entre campo y ciudad, que perpetuaba la autonomía social de todos los sectores trabajadores, como bien lo explicó Pedro Francisco Bonó. El hecho nacional dominicano pasó así por la capacidad de los campesinos de repeler los intentos por alterar este ordenamiento. En buena medida, esto estaba vinculado al dominio externo tal como se advierte en un somero recorrido por las décadas previas a la Restauración.

En 1808 el pueblo, en su casi totalidad, derrotó la dominación francesa que buscaba restablecer la vigencia de la esclavitud y someter al conjunto de dominicanos a un estado de inferioridad jurídica y social. Fue, como bien lo expresó Américo Lugo, la primera manifestación del espíritu de autodeterminación entre los dominicanos. En 1826 los dominicanos también en conjunto vetaron la aplicación del Código Rural del presidente haitiano Jean Pierre Boyer, mediante el cual se buscaba



someter a la masa campesina a condiciones dura de trabajo y de subordinación que rememoraban la esclavitud.

Después de proclamada la Independencia de 1844 el sector conservador dirigente, encabezado por Pedro Santana, se cuidó de no agredir frontalmente a los campesinos buscando la reiteración de su apoyo. Pero una agenda de tensiones enfrentaba al grupo de poder con la masa del pueblo puesto que para el primero resultaba indispensable la búsqueda de mayores porciones de excedentes para sostener su dominio que se asimilaban en buena medida a su propia condición social. Una agenda oculta de disputas y equilibrios en definitiva explica que para los grupos dirigentes de la existencia del Estado resultase inviable o en cualquier caso inconveniente. El hecho nacional plasmado en 1844 requería por definición un grupo dirigente que no creía en él.

Fue cuestión de que llegaron las condiciones en el terreno internacional y en los debates políticos internos, tras la subordinación de los liberales partidarios de la autonomía nacional, para que se produjera el ansiado cumplimiento del objetivo de revocar el orden político autónomo como síntesis del programa del sector conservador dirigente. En el siglo XIX este era el único punto que generaba la escisión entre liberales y conservadores, puesto que ambos sectores propugnaban por una sociedad de mayor desarrollo económico y diferenciación clasista en sentido moderno. Pero en la medida en que los conservadores detentaban el poder social más determinante en esa sociedad atrasada y que entendieron la imposibilidad de romper los equilibrios en cuestión, lograron el sostén de la clase campesina. En este panorama la Anexión a una potencia era un hecho inevitable.



Desde luego, intervinieron diversos factores adicionales en la plasmación del hecho anexionista de marzo de 1861 como fueron las intensas crisis económicas posterior a 1857 por causa de la guerra civil de un año, la guerra civil de Estados Unidos que dejó campo libre a España con el apoyo de Francia, la amenaza que se cernía sobre el grupo conservador santanista, por parte de sus enemigos partidarios de Buenaventura Báez y las insurrecciones fronterizas que traducían el pánico ante el fantasmagórico peligro haitiano.

El programa del régimen español implantado en 1861 en teoría se adecuaba a las expectativas del conjunto de los grupos dirigentes urbanos, esto es, burgueses y burocráticos, por cuanto los componentes del dominio externo se encontrarían en capacidad de romper los nudos gordianos que impedían el ansiado avance económico. Este consenso es el que explica, en lo fundamental, la tregua con que fue recibida la Anexión por la casi totalidad de la población, no obstante los temores que albergaban muchos acerca de la reimplantación de la esclavitud o la pérdida de los derechos civiles y políticos. La condición atrasada de España determinó que este proyecto se sustentara en la búsqueda de la extorsión sistemática de la clase campesina y la subordinación de los mismos sectores sociales que lo habían prohijado.

Los impuestos proliferaron y con ellos los abusos. El mercantilismo metropolitano agredió frontalmente los intereses de los grupos comerciales dirigentes. Los mismos puestos en el Estado fueron disputados por una arrogante capa de peninsulares que despreciaban a los mismos gestores de la Anexión. Todo esto se personificó en el momento trágico de la vida del tirano Pedro Santana, obligado a debatirse entre un régimen que tenía que apoyar pero que en su fueron interno abominaba. De



forma que la Anexión perdió sustancia y preparó ella misma las condiciones para su sepultura por arte de una acción llamada a concitar la participación de la inmensa mayoría.

La Guerra de la Restauración de 1863 respondió, así, a los fundamentos depredadores del régimen español, pero al hacer retomó líneas maestras del proceso progresivo de la constitución de la nación dominicana. Por tanto, se trató de una insurrección que articulaba factores sociales complejos con la renovada búsqueda de un orden político progresivo que sustentara el proyecto de la autonomía nacional.

Para entender la dimensión del hecho histórico cabe insistir en que se produjo contra una potencia que tenía una prominente participación en las relaciones internacionales y que mantenía los restos de su imperio colonial en las dos islas vecinas de Cuba y Puerto Rico. La Restauración cuestionó todo un proyecto de reconstitución del poder imperial español, por lo cual requirió de una contienda dura. Y en este sentido es que la resistencia de todo un pueblo se puso a prueba. Así, la primera percepción que arroja este hecho fue la unidad nacional que lo hizo invencible. Basta referir que España llegó a tener cerca de 40 mil hombres entre tropas peninsulares, de las dos Antillas y las reservas dominicanas, frente a no más de 10 mil dominicanos en los momentos de máxima tensión de los combates.

Esta unanimidad no tiene otra explicación que el acuerdo de todos por el restablecimiento de la dignidad perdida y no solo de intereses económicos lesionados. Particularmente es lícito presentar la contienda como un acto reactivo del campesinado frente a los mecanismos económicos de extorsión pero también los actos de subordinación que implicaban pérdidas de derechos y situaciones humillantes.



Pero la Restauración fue más que una simple revuelta por el restablecimiento de un orden vulnerado. Fue, en verdad, la culminación del largo trayecto de la construcción de la nación porque comportó el proyecto de construir un orden nuevo. Esto último cupo primordialmente a un agrupamiento regional de inspiración liberal que, sin embargo, había negociado con el agrupamiento conservador dirigido por Pedro Santana.

Estos políticos e intelectuales, como Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Rojas, Belisario Curiel, Pablo Pujols, Alfredo Detjeen y tantos otros, rediseñaron el ideal de un orden republicano que pautó la conducción de la guerra desde su instancia política dirigente. En consecuencia, la envergadura y la propia sustancia de este acontecimiento se derivaron de la hegemonía de este conglomerado de políticos e intelectuales que obtuvieron el concurso de una porción de los jefes militares, aunque esto estuviese atravesado por factores contradictorios múltiples. Adicionalmente, resultó crucial que este núcleo dirigente estuviera en condiciones de concitar el apoyo de la generalidad de la población como hecho inédito. El contenido nacional entrañaba entonces una aspiración común de todos con la participación activa de la generalidad de la población y el liderazgo político e ideológico del liberalismo.

En otros términos, la Restauración fue una guerra campesina con un liderazgo urbano que trascendía el universo cultural de la mayoría aunque sostenido en esta última. Solo así se entiende la potencia bélica de los dominicanos frente a un ejército bien organizado como era el español. Es cierto que todavía existía una equivalencia de recursos bélicos que dejaba el margen para una insurrección de este tipo. Pero también la guerra fue exitosa por su contundencia social y por haberse



sostenido de procedimientos que le daban curso a esta última. Los dominicanos aplicaron un saber centenario en el orden militar que convergió con preceptos de los intelectuales que terminaron de diseñar una estrategia exitosa de tipo guerrillero.

En realidad, la Guerra Restauradora no fue solo una guerra de guerrillas puesto que conminó movimientos de tropas regulares, líneas estables de frente y acciones guerrilleras continuas que en conjunto socavaron la potencia del ejército enemigo. Esta determinación estuvo anclada en una voluntad puesta a toda prueba. Su principal componente fue el sacrificio atroz de casi todos los dominicanos mientras se prolongó la contienda. Hasta campeaba el hambre entre los integrantes del Gobierno Restaurador. Basta referir que el arancel de la exportación irregular de tabaco por la frontera norte se elevaba a un 50 por ciento.

Durante estos casi dos años el esfuerzo bélico se sostuvo gracias al trabajo de los que no estaban en el frente especialmente las mujeres; todos vivían en condiciones de privaciones extremas por la desorganización que entraña una guerra de esta naturaleza. La situación de los combatiente no era mejor: se sustentaban sobre la base de procedimientos accidentados, como el sabaneo o la cacería de reses mansas y cimarronas. Bonó describe al respecto un cantón en la zona de Yamasá, donde recoge que los soldados mambises vestían de harapos y cada día debían procurarse los alimentos.

Una contienda de esta naturaleza tuvo tales alcances que alteró los fundamentos del sistema político hasta entonces existentes, basado en el protagonismo de una camarilla capitalañea de raigambre colonial. En tal sentido la Restauración fue una guerra civil que tuvo una envergadura sin precedentes pero también una calidad inédita de corte social. Bonó resume



esto de manera adecuada cuando refiere la eliminación de los sistemas de jerarquía social. En pero, no se produjo la situación del viejo liderazgo conservador por uno liberal de nuevo tipo.

Los jefes políticos restauradores estuvieron en la guerra mientras duró, pero debajo de ellos se fraguó un fenómeno social y político de nuevo tipo que alteró el decurso ulterior de la vida del país. De las entrañas de los jefes de las tropas dispersas por varias líneas de frente emergieron nuevos lineamientos de autoridad. El Gobierno Restaurador, en realidad, no controlaba a estos jefes, quienes para sostenerse estaban obligados a utilizar mecanismos sobre la marcha que ratificaban a una concentración de prerrogativas en el ámbito de sus zonas de influencia. El centralismo de los gobiernos previos, sobre todo posteriores a 1844, quedó sepultado por caudillismos.

Durante la propia Restauración, la jefatura política debió negociar con este poder de base de los generales que empezaron a esbozar con claridad intereses particulares que no coincidían con los propósitos universalistas y democráticos que pautaban el proyecto nacional. A esto aludió Hostos, otro agudo analista de los procesos históricos dominicanos, al calificar como demagogia la acción de estos emergentes líderes militares. No se trató de un hecho desdeñable, puesto que eran esos generales quienes encuadraban la participación de la masa campesina. Ellos mismos, salidos de las entrañas del pueblo, actuaron de forma reactiva, por lo cual no se consustanciaron de los principios liberales.

En el fondo, lo sucedido comportó alianzas múltiples de factores sociales, políticos y territoriales. Colaboraron indistintamente campesinos y burgueses, y antiguos santanistas y baecistas, sureños y cibaños. Hoy, retrospectivamente se está



en condición de visualizar que, salidas las tropas españolas, todos estos intereses buscaron espacios para su reubicación. En realidad, las tensiones subyacentes estuvieron presentes todo el tiempo pero encontraban resolución por el imperativo de obtener la victoria. José Antonio (Pepillo), Salcedo, el primer presidente restaurador, fue derrocado y ejecutado por su declarado propósito de reinstalar en la presidencia de Buenaventura Baéz. Quien dirigió esta acción, Gaspar Polanco fue el único general santanista durante el período republicano que se unió en la primera hora a las huestes de campesinos y que por tal circunstancia fue colocado como feje supremo del Ejército Dominicano.

Tras el 11 de julio de 1865, fecha de finalización de la retirada de las tropas españolas, el factor que de inmediato hizo crisis fue la contraposición de los intereses regionalistas. Dentro de su complejidad, la Restauración fue también un medio de los dirigentes cibaños para establecer su hegemonía a escala de toda la República. Ciertamente, se defendían frente a las exacciones del centralismo burocrático previo y, al mismo tiempo, entendían que eran ellos los que tenían las condiciones para implantar el orden nacional, beneficioso a todos. No lo entendieron así los generales del sur, algunos de ellos ya definidos en torno a ciertos postulados liberales, quienes a las pocas semanas de paz desconocieron la constitución que estipulaba que la sede del Gobierno se encontraba en Santiago.

Así, la pugna entre sureños y cibaños atravesó al mismo conglomerado reducido de jefes militares que se habían acercado a los principios liberales. De un lado estaba José María Cabral, pero del otro el derrocado Pedro Antonio Pimentel, ambos prohombres del sedicente Partido Nacional, expresión carente de sustancia, ideada por los intelectuales



que recibieron la protección de jefes como Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, cada uno inmerso en actuaciones que denotaban la fragilidad y dispersión de que fueron víctimas los conductores de la gesta restauradora.

Lo sustantivo fue que estos vacíos, conflictos y dilemas dieron por resultado la recuperación del conservadurismo en su matriz programática del anexionismo. Su fundamento ahora pasaba a localizarse en los caudillos que precisaban, por su falta virtual de un propósito nacional, de la superposición de élites políticas capaces de gestar un gobierno. Resulta a todas luces estremecedor que al cabo de cuatro años de concluida esta gestión paradigmática de la libertad de los dominicanos se suscribiese secretamente una intención de acuerdo para entregar la soberanía dominicana a los Estados Unidos en calidad de territorio, lo que equivalía a posesión colonial. En 1871 se convocó a una supuesta elección, bajo un régimen de terror con el apoyo de la gran mayoría de generales y del campesinado en el que solamente 11 personas habrían votado en contra de la anexión a Estados Unidos.

En definitiva, se restauró en cierta manera el orden existente antes de 1861. Pero la historia no podía ir para atrás, como bien querían muchos de los actores. La Restauración dejó un sedimento que no pudo ser borrado y que se expresó en la aparición como fuerza política con opción de poder del liberalismo. El conflicto político dejó de ser exclusivo del entorno conservador por cuanto la cuestión vigente radicaba en el afianzamiento del Estado Nacional. Aunque minoritario y hasta cierto punto aislado, los liberales tenían de su lado las circunstancias del avance de la historia a partir de una realidad que en proporción decisiva estaba marcada por los efectos de la Restauración recién transcurrida.



Se había puesto de relieve la factibilidad de que la acción del pueblo derrotase a un régimen anexionista. Todavía más importante fue que la experiencia demostraba la incompatibilidad del dominio extranjero directo con los intereses genéricos de los dominicanos. Esto, por supuesto, no se reducía a una cuestión económico-social en la medida en que de por medio obraba el sentido de la dignidad que deparaba un orden nacional. Fuera de toda duda, la magnitud de la guerra nacional permeó las miras de las élites y reconfiguró, por consiguiente, el panorama político e ideológico en el sentido de consolidar el hecho nacional con ingredientes antes desconocidos.

Por todo ello, es aceptada la definición de Hostos de que la Restauración fue la verdadera Acta de Independencia del pueblo dominicano. Y lo fue adicionalmente porque inauguró una historia irreversible de profundización del hecho nacional que, a la larga, terminó descartando la expectativa anexionista de una porción de las élites burocráticas y comerciales dirigentes.

Ahora bien, no se obtuvo el régimen ideal por el que propugnaron los líderes restauradores. Nuevos problemas advinieron con la modernización económica de finales del siglo XIX y la consolidación del Estado Nacional. Pero los mismos se dirimieron en nuestro propio espacio definiéndose los agentes políticos y sociales que fueron propugnando por nuevos avances o cuestionando la explotación y la opresión. El carácter no concluido de los efectos de la Restauración se ha perpetuado hasta el presente. Desde hoy estamos en condiciones de tener en perspectiva problemas y debates que han estado en la base del proceso histórico iniciado en 1863.



Acaso el balance más crucial que ofrece el examen de los hechos, radica en la unidad nacional como sumatoria de propósitos diversos que anima la constitución de sujetos que pueden sintetizarse en planos de ejercicio de una hegemonía democrática, popular y progresiva. Pero ninguna enseñanza habrá que esperar de manera directa del estudio de la historia, por cuanto el programa valedero de un nuevo orden solo podrá ser adecuado en la medida en que responda a las relaciones del presente histórico.

Ahora bien, el presente está construido sobre líneas de fuerza provenientes del pasado, por lo cual el estudio de fenómenos como la Restauración transmite un saber indispensable, que va más allá de la inspiración, que abra las puertas a las resoluciones concretas y eficientes que hagan avanzar la historia por la acción autónoma del pueblo y de los sujetos que se constituyen en su accionar.

Diversos corolarios deben ser extraídos con vistas a la formulación de lineamientos pragmáticos que resulten del análisis histórico. El primero y más claro, es que los problemas de los dominicanos solo podrán ser abordados fructíferamente por los propios dominicanos y que el único escenario en que esto es posible es el del ejercicio de la autonomía nacional. Seguimos siendo tributarios de la hazaña de nuestros antepasados, aunque las condiciones del mundo de hoy hayan experimentado cambios sustanciales. Si bien las relaciones internacionales han afianzado la interdependencia entre los países, ninguna panacea es legítima a nombre de la globalización que comporta el recorte o la anulación de las prerrogativas inherentes a la autodeterminación nacional.

En todo caso, lo que está postulado creativamente en el presente es la articulación entre naciones iguales como



instrumento para un orden superior. La Restauración, asimismo, provee insumos ideológicos que cuestionan las certezas vigentes del pensamiento único acerca de las bondades de la globalización. Ella fue una gesta porque los dominicanos prefirieron ser pobres para seguir siendo libres y consiguientemente desecharon, fruto de experiencias dolorosas, los parabienes del progreso que traía aparejada la dominación extranjera. Las situaciones históricas no puede extrapolarse, en el presente nos encontramos con un panorama por completo distinto y aun así la Restauración debe estar llamada a operar como referente dentro del decurso de nuestra historia para la construcción de un nuevo orden que culmine los dilemas y los debates de más de dos siglos.

